

# Diálogo realista, sin autoritarismos ni intemperancias

Una semana después del desborde violentista indígena de Bagua, tenemos que insistir en la urgencia de deponer las actitudes de intolerancia y radicalismo, para dar paso a un diálogo franco y realista del que pueda fluir una solución sostenible a mediano plazo.

La protesta es comprensible, pero los conatos de violencia en algunas marchas son realmente lamentables, pues no ayudan a la necesaria distensión. Son igualmente reprobables los escándalos suscitados en el Congreso, donde la intemperancia del sector humalista—que convirtió el hemiciclo en una plazuela de protesta—, fue respondida con una polémica y dura medida de suspensión que no respetó escrupulosamente el debido proceso.

En este contexto, corresponde al presidente Alan García asumir un auténtico liderazgo democrático, sin insistir en posturas reduccionistas, como la que evidenció ayer cuando declaró que había sido “demasiado dialogante”, lo que suena irónico a los oídos de muchos. La gravedad del momento exige apertura y ponderación para conciliar posiciones en un diálogo realmente

participativo, que incluya la consulta sobre temas álgidos.

Entendemos la dificultad de entenderse cuando hay muertos y agravios de por medio. Pero, por lo mismo, hay que redoblar esfuerzos para deponer maximalismos y autoritarismos y pasara la autocrítica y la negociación. Si el Gobierno falló en la estrategia política y operativa, pues debe reconocerlo para reivindicarse con un plan de difusión, comunidad por comunidad, sobre su concepción del desarrollo en la selva que compatibilice el respeto de las diferencias culturales con el orden legal del Estado.

En cuanto a la oposición, sobre todo la humalista, le corresponde también hacer un mea culpa. Si ya se decidió la suspensión indefinida de los decretos, es necio insistir, aquí y ahora, en la derogación, que es lo que en la práctica se ha hecho.

Hay señales positivas que marcan la ruta, como el anuncio del Tribunal Constitucional de que acogerá las demandas de inconstitucionalidad contra los decretos 1064 y 1090 y les dará trámite expeditivo. Ese es el camino, el que proveen los mecanismos del sistema democrático para asegurar el orden y la autoridad, con

respeto de la ley y de los derechos de las mayorías y minorías.

Ayer mismo hubo una reunión de tres ministros con varios presidentes regionales, lo que debe canalizarse hacia la mesa de diálogo en la que deben participar los legítimos representantes del Gobierno y las comunidades nativas. Sería también conveniente que estuvieran los alcaldes de las zonas conflictivas, que conocen de cerca los problemas.

La Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, que sigue haciendo una labor destacada para hacer el balance final y desinflar las versiones de supuestas masacres de campesinos, pueden igualmente aportar mucho de ponderación.

Hay que mantener la calma y la tregua. La gobernabilidad democrática y la paz social, que han sido afectadas arteramente en los últimos días, son objetivos mayores que tenemos que defender por encima de prejuicios, intereses politiqueros y falsos orgullos.

No al autoritarismo ni a la violencia; sí al diálogo, la tolerancia y el entendimiento entre los peruanos. ■

## A PROPÓSITO DE LOS PROBLEMAS CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

### El poder está en el diálogo

Martha Meier M.Q.  
Periodista\*



Las relaciones entre los peruanos no pueden seguir siendo alteradas ni modificadas por tratados comerciales que, a su vez, requieren de leyes que atentan contra los intereses de la población y otorgan una serie de derechos a los inversionistas que el común de peruanos no poseemos. Las inversiones y planes de desarrollo deben enfocarse también en el beneficio de quienes habitan en las zonas donde se aprovecharán las riquezas naturales o se construirán grandes obras de infraestructura.

El camino hacia el verdadero desarrollo—viable ambiental y socialmente—pasa por la sensibilidad política, la inclusión y el respeto a la diversidad étnica y cultural que no son sino expresión del amor en el que deben sostenerse las relaciones humanas. El recordado papa Juan Pablo II dijo alguna vez a los indígenas: “A ustedes, cuyos antepasados fueron los primeros habitantes de esta tierra, al tener sobre ella un derecho adquirido a lo largo de generaciones, les sea reconocido ese

derecho de habitar en ella en paz y serenidad, sin el temor—verdadera pesadilla—de ser desalojados en beneficio de otros, antes bien estén seguros de un espacio vital, que será base no solamente para su supervivencia, sino para la preservación de su identidad como grupo humano, como verdadero pueblo y nación”.

Supo el Santo Padre comprender el temor de las poblaciones nativas de perder sus tierras. Este miedo es en el fondo la raíz que desencadenó la tragedia en la Curva del Diablo. Lo que empezó hace dos meses como una protesta de nativos contra dos normas que creaban inseguridad sobre el destino de sus territorios, terminó con el doloroso saldo de policías y amazónicos muertos. Un enfrentamiento entre peruanos que pudo y debió evitarse.

El Estado—el gran ausente en la salud, educación, nutrición y en promover el acceso de estos compatriotas al ejercicio pleno

“Algunos políticos echan más leña al fuego con una irresponsabilidad escalofriante”

de sus derechos—llegó con sus fusiles y helicópteros. Los nativos alzaron las lanzas y no les tembló la mano para asesinar a machetazos a policías. Los amazónicos sufrieron también la descarga de balas sobre sus cuerpos. Se apresó a muchos y se dictó orden de captura contra el señor Pizango (acusado de azuzar la violencia). El líder aguaruna y principal cabeza de Aidesep—organización que agrupa a las distintas comunidades nativas de nuestra Amazonía—ha pedido asilo a Nicaragua. El Congreso dejó las normas cuestionadas en suspenso, pero las cosas van de mal en peor para el Gobierno. A lo largo y ancho del país diversos grupos de la sociedad realizan marchas y paros en solidaridad con los nativos amazónicos y sus demandas. De paso algunos políticos echan más leña al fuego con una irresponsabilidad escalofriante y, sin duda, con miras a las elecciones del 2011. Una crítica situación de la que empezarán a sacar provecho quienes quieren traerse abajo eso que llamamos ‘sistema’ y que se encarna en la figura del presidente García y en las instituciones democráticas.

La Defensoría del Pueblo (cuya actuación ante los lamentables sucesos de Bagua ha sido rápida, efectiva e impecable) y la doctora Beatriz Merino son piezas claves si se intenta retomar el diálogo en la actual coyuntura de temor, desconfianza y ánimos exaltados. La tarea de quienes están en el poder es justamente saber enfrentar esos temores, interpretar los mensajes de las poblaciones excluidas, procurarles calma y optimismo, y trabajar por su participación activa en la vida nacional. Y eso, señor presidente, solo se logra a través del diálogo. ■

\* ESPECIALIZADA EN TEMAS AMBIENTALES

## HUMOR PROFANO

Por Molina



## LAS INSTITUCIONES SOCIALES INTERMEDIAS

### Una reforma por realizar

Francisco Morales Bermúdez  
Ex presidente del Perú



Hay una reforma fundamental que realizar en nuestro país: lograr una mayor participación de la ciudadanía en la vida nacional. Ello contribuiría a fortalecer la identidad nacional y a hacer más viable el ejercicio democrático.

El peruano reclama hoy no solo el derecho de elegir, sino la oportunidad de participar de algún modo en los actos del Gobierno que ha elegido. En la actualidad, ante las diferentes situaciones de conflicto que se presentan, se acude a las mesas de diálogo que en alguna forma, poco orgánica, tratan de encontrar soluciones. Esta situación puede mejorar si resolvemos cómo llenar el vacío que existe entre el individuo y la alta administración del Estado, haciendo participar a las instituciones sociales intermedias que son aquellas asociaciones, sociedades o instituciones

que tienen diferentes fines sociales o colectivos y que están en capacidad de intermediar entre la persona y el Estado.

Son ejemplo de instituciones sociales intermedias las asociaciones de padres de familia, de profesionales, empresariales, artesanales, de jubilados, de retirados de las FF.AA., las cooperativas, las universidades, los sindicatos y federaciones de trabajadores, las comunidades campesinas y nativas. Estas instituciones no deben politizarse sino mantenerse como representantes sociales de sus bases. Si se logra una participación organizada de ellas permitirán neutralizar las volubilidades de las masas así como la manipulación.

Para que los ciudadanos exijan con éxito al gobernante que cumpla lo prometido, es necesario que manifiesten sus reclamos sociales, económicos, familiares, de salud a través de estas instituciones, es decir, de toda agrupación de ciudadanos organizados para conseguir un beneficio común proyectado al ámbito de la

sociedad. A fin de lograr este objetivo, planteamos una reforma constitucional que permita tener un Congreso de la República constituido por:

Una cámara legislativa que mantenga las facultades que la Constitución vigente establece, constituida por el 50% de representantes en el ámbito nacional y 50% por las regiones.

Una cámara social, constituida por representantes debidamente calificados de todo el país y miembros de las instituciones sociales intermedias, con derecho de consulta, iniciativa y petición. Deben tener la facultad de proponer cierto tipo de leyes relacionadas fundamentalmente con los problemas de la población en su conjunto o con sectores de ella, y de participar en la aprobación de otras.

Se trata pues de fortalecer la democracia, buscando canales apropiados para que la población participe de modo organizado en la política nacional que atañe a los intereses de conjunto y grupales. ■



## rincón del autor

Hugo Guerra



No se pueden negar los errores de nuestro Gobierno en el lío indígena, pero es cierto que existe una conspiración para derrocar al presidente peruano

## Objetivo: Alan García

Buen lector, la inicial incredulidad en torno de la denunciada conspiración internacional detrás de la violencia desatada en nuestra Amazonía se disipa al revisar las redes del movimiento indígena hemisférico.

Hace dos semanas, la IV Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas (realizada en Puno) acordó “un inmediato levantamiento nacional de los pueblos en junio del 2009 por la derogatoria de los decretos antiindígenas generados por el TLC con Es-

tados Unidos”.

Entonces el hoy prófugo Alberto Pizango, dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), llamó a la rebelión incurriendo en delito de sedición.

Aidesep forma parte del Foro de Sao Paulo, una suerte de coordinadora de organizaciones de la izquierda marxista de latinoamericana fundada en 1990.

Entre sus miembros principales están el PC de Cuba, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las FARC de Colombia, el Fre-

nte Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua, la Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG), la Coordinadora Bolivariana de Venezuela, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de México, etc. Entre los peruanos están el Partido Nacionalista (humalista) y Patria Roja.

En la dirección del foro se identifican personajes como Fidel Castro, Tomás Borge (hoy

embajador indeseable de Nicaragua en Lima), Daniel Ortega y el ex guerrillero argentino Enrique Gorriarán (vinculado al MRTA). Incluso hasta su muerte figuraba como líder el guerrillero colombiano Raúl Reyes y Hugo Chávez cofinancia el foro. Apparentemente, además, esta red tiene vínculos con el narcotráfico, como en Colombia y en el VRAE.

Aparte de promover un ecologismo radical (que se opone incluso a la construcción de carreteras en la selva), el foro confronta el capitalismo, la globalización y la democracia burguesa, y alienta el separatismo bajo el argumento de que los territorios ocupados por las comuni-

dades indígenas no pertenecen a los Estados nacionales. Encabezan este escalón—que postula una América utópica, la Abya Yala—entidades polémicas como la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).

Esta transnacional subversiva se proponía manipular a nuestros indígenas amazónicos para que con el ‘baguazo’ se iniciara una maniobra equivalente a la que lanzó la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) en el 2001 para derrocar a Jamil Mahuad y a la del movimiento indígena que mani-

puló Evo Morales en el 2003 para derrocar a Sánchez de Losada.

Ciertamente, los sediciosos aprovecharon la fragilidad negociadora del Gobierno Peruano e instrumentalizaron a aquellos indígenas que están perdiendo su identidad a manos de quienes criminalmente los utilizan como carne de cañón para propiciar el socialismo continental, que debe primero conseguir una balcanización para luego construir la ‘patria bolivariana’.

En este esquema, derrocar a García es una necesidad para terminar con uno de los últimos baluartes de marxismo de esta parte del subcontinente americano. ■